



## Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general  
27 de noviembre de 2012  
Español  
Original: inglés

### Comité de Derechos Humanos

#### Comunicación N° 2073/2011

#### Dictamen aprobado por el Comité en su 106° período de sesiones (15 de octubre a 2 de noviembre de 2012)

<i>Presentada por:</i>	Liliana Assenova Naidenova y otros (representados por la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y la Asociación para la Igualdad de Oportunidades)
<i>Presuntas víctimas:</i>	Los autores
<i>Estado parte:</i>	Bulgaria
<i>Fecha de la comunicación:</i>	25 de junio de 2011 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del Reglamento, transmitida al Estado parte el 8 de julio de 2011 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	30 de octubre de 2012
<i>Asunto:</i>	Desahucio inminente y demolición de viviendas de la comunidad romaní arraigada desde hace tiempo en el lugar
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Recurso efectivo; injerencias arbitrarias e ilegales en el domicilio de la persona; derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección de la ley; discriminación por motivos de origen étnico
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Otro procedimiento de examen o arreglo internacional; agotamiento de los recursos internos
<i>Artículos del Pacto:</i>	2; 17 y 26
<i>Artículo del Protocolo Facultativo:</i>	5, párrafo 2 a) y b)

## Anexo

### **Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (106º período de sesiones)**

respecto de la

#### **Comunicación N° 2073/2011\***

<i>Presentada por:</i>	Liliana Assenova Naidenova y otros (representados por la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y la Asociación para la Igualdad de Oportunidades)
<i>Presuntas víctimas:</i>	Los autores
<i>Estado parte:</i>	Bulgaria
<i>Fecha de la comunicación:</i>	25 de junio de 2011 (presentación inicial)

*El Comité de Derechos Humanos*, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Reunido* el 30 de octubre de 2012,

*Habiendo concluido* el examen de la comunicación N° 2073/2011, presentada al Comité de Derechos Humanos por Liliana Assenova Naidenova y otras nueve personas en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Habiendo tenido en cuenta* toda la información que le han presentado por escrito los autores de la comunicación y el Estado parte,

*Aprueba el siguiente:*

#### **Dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo**

1.1 Los autores de la comunicación, de fecha 25 de junio de 2011, son Liliana Assenova Naidenova, Blaga Lubchova Naidenova, Traianka Ivanova Naidenova, Gura Borisova Marinova, Pavel Triachev Peshev, Blagoi Trianov Assenov, Pavlina Marinova Mladenova, Stefka Vassileva Christova, Stoianka Tzvetanova Trianova y Vela Borisova Mihailova, todos nacionales búlgaros de etnia romaní pertenecientes a la comunidad de Dobri Jeliaskov, ubicada en Sofía (Bulgaria). Afirman que Bulgaria vulneraría los derechos que los asisten en virtud de los artículos 2, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en caso de desalojo y demolición de sus viviendas en la comunidad de Dobri Jeliaskov. El Protocolo Facultativo entró en vigor para Bulgaria el 26 de junio de 1992. Los

---

\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Yadh Ben Achour, Sr. Lazhari Bouzid, Sra. Christine Chanet, Sr. Cornelis Flinterman, Sr. Yuji Iwasawa, Sr. Walter Kälin, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sr. Gerald L. Neuman, Sr. Michael O'Flaherty, Sr. Rafael Rivas Posada, Sr. Nigel Rodley, Sr. Fabián Omar Salvioli, Sr. Marat Sarsembayev, Sr. Krister Thelin y Sra. Margo Waterval.

autores están representados por la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y la Asociación para la Igualdad de Oportunidades.

1.2 El 8 de julio de 2011, con arreglo al artículo 92 de su reglamento, el Comité de Derechos Humanos, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, pidió al Estado parte que se abstuviera de desalojar a Liliana Assenova Naidenova y a los demás autores y de demoler sus viviendas mientras el Comité estuviese examinando su comunicación. El 9 de mayo de 2012 se reiteró esta solicitud de medidas provisionales.

### **Antecedentes de hecho**

2.1 La comunidad de Dobri Jeliaskov, integrada por romaníes necesitados, existe desde hace más de 70 años. Durante este tiempo, las viviendas de la comunidad han sido reconocidas de hecho por las autoridades públicas, ya que, por ejemplo, las han dotado de servicio de correo individual, así como de servicios públicos regulados, como la electricidad. La comunidad consta asimismo en el registro de la policía.

2.2 El 12 de julio de 2006 se informó a los habitantes de la comunidad de Dobri Jeliaskov de la llamada "carta de invitación" remitida el 11 de julio de 2006 por la alcaldesa de la municipalidad metropolitana de Sofía, subdistrito de Vuzrajane, en que se les solicitaba que abandonaran voluntariamente las viviendas construidas ilegalmente en terrenos municipales. La comunidad no acató esta solicitud y, el 24 de julio de 2006, el municipio metropolitano de Sofía, subdistrito de Vuzrajane, dictó una orden de desalojo de la comunidad de Dobri Jeliaskov. En la orden de desalojo se señalaba que se habían construido ilegalmente edificios en un terreno de indiscutible propiedad municipal, con arreglo a lo establecido por la administración municipal en edictos de fecha 26 de junio de 2006, y se citaban el artículo 65 de la Ley de propiedad municipal y el artículo 178, párrafo 5, de la Ley del territorio, que permitían la demolición de los edificios construidos sin los permisos correspondientes en predios de propiedad municipal y el desalojo de las personas que los habitaban. En representación de la comunidad, la Asociación para la Igualdad de Oportunidades recurrió la resolución ante el Tribunal Municipal de Sofía y, de conformidad con lo autorizado por el artículo 65 de la Ley de propiedad municipal, pidió una orden judicial de suspensión del desalojo mientras estuviese examinándose el recurso. Esa orden judicial fue concedida inicialmente por el Tribunal Municipal de Sofía.

2.3 No obstante, el 15 de abril de 2008, el Tribunal Municipal de Sofía dictaminó que la orden de desalojo era legal. La comunidad de Dobri Jeliaskov recurrió la decisión del Tribunal Municipal de Sofía ante el Tribunal Administrativo Supremo, que la confirmó el 28 de octubre de 2009. Desde entonces, la orden es susceptible de ejecución inminente. El 26 de marzo de 2011, la municipalidad de Sofía publicó un edicto para que se ejecutara la orden de desalojo. El 23 de junio de 2011 se entregó el edicto a los habitantes de la comunidad de Dobri Jeliaskov, a quienes se concedió siete días para presentar objeciones. Aunque se han presentado las objeciones ante la municipalidad, con ello no se impediría que el desalojo se lleve a cabo.

2.4 En el momento en que se presentó esta comunicación al Comité, diez familias estaban bajo amenaza inminente de desalojo y demolición de su vivienda. Entonces vivían en la comunidad de Dobri Jeliaskov 34 personas, 15 de ellas niños. El resto de la comunidad había salido de la zona en 2006, tras la emisión de la orden de desalojo inicial. Según los autores, no se han ofrecido viviendas sustitutivas a ninguno de los que van a ser desalojados por la fuerza ni se ha celebrado realmente ninguna consulta con la comunidad; y, según ha declarado la alcaldesa de la municipalidad de Sofía, subdistrito de Vuzrajane, dado que las familias vivían ilegalmente en la comunidad de Dobri Jeliaskov, la municipalidad no podía proporcionarles una vivienda sustitutiva.

## La denuncia

3.1 Los autores sostienen que el carácter irregular del asentamiento (es decir, su denominación de "edificios ilegales") se debe en gran parte al cuadro persistente de discriminación racial contra los romaníes de la comunidad de Dobri Jeliaskov. Esta discriminación incluye la falta de oportunidades educativas y de empleo que les permitan acceder a una vivienda a precios de mercado. Los autores se remiten a las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que se señala que, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para combatir el desempleo, no se ha "logrado éxito en esa esfera" y "se deplora la situación en que se encuentran las personas que cobran un salario que no les permite lograr un nivel de vida adecuado para ellas y sus familiares"<sup>1</sup>.

3.2 Los autores afirman que el Estado parte no ha proporcionado a la comunidad de Dobri Jeliaskov, arraigada desde hace tiempo en el lugar, ninguna seguridad de la tenencia, ni siquiera el mínimo "grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas", exigido por sus obligaciones internacionales y nacionales en material de derechos humanos<sup>2</sup>. Añaden que no existen mecanismos internos para oponerse con éxito el desalojo en casos en que se deniega incluso el grado mínimo de seguridad de la tenencia<sup>3</sup>.

3.3 Los autores sostienen que los desalojos forzosos y las amenazas de llevarlos a cabo constituyen una infracción del artículo 17, leído conjuntamente con el artículo 2, del Pacto. Recuerdan que el Comité ha señalado en anteriores observaciones finales que la práctica de los desalojos forzosos "coarta arbitrariamente los derechos que el Pacto otorga a las víctimas de los desalojos, especialmente en el artículo 17"<sup>4</sup>. El Comité añadió, además, que el Estado parte interesado debía "velar por que no se desalojen los asentamientos a menos que se haya consultado a los afectados y se hayan hecho arreglos adecuados para reasentarlos"<sup>5</sup>. En una situación de hechos similares, el Comité condenó los desalojos forzosos y la demolición de viviendas construidas sin licencia, así como los sistemas de planificación municipal discriminatorios<sup>6</sup>.

3.4 Los autores afirman que la amenaza de desalojo forzoso de la comunidad de Dobri Jeliaskov es, además, ilegal, ya que vulnera, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, que incluye la prohibición de los desalojos forzosos, consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como se establece en las Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº 7 (1997) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos<sup>7</sup>, y que dichas observaciones generales permiten definir de manera autorizada la prohibición de los desalojos forzosos en virtud del derecho internacional en general y con arreglo al Pacto en particular. Por consiguiente, dado que los desalojos forzosos como tales son contrarios al Pacto Internacional de Derechos Económicos,

<sup>1</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Bulgaria, E/C.12/1/Add.37, párrs. 13 y 14.

<sup>2</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 4 (1991), sobre el derecho a una vivienda adecuada, *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1992, Suplemento Nº 2* (E/1992/23), anexo III, párr. 8 a).

<sup>3</sup> No obstante, los autores han tratado de impugnar las órdenes de desalojo llevando su caso ante el Tribunal Municipal de Sofía.

<sup>4</sup> Comité de Derechos Humanos, observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Kenya, CCPR/CO/83/KEN, párr. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Comité de Derechos Humanos, observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Israel, CCPR/C/ISR/CO/3, párr. 17.

<sup>7</sup> *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento Nº 2* (E/1998/23), anexo IV.

Sociales y Sociales y Culturales, constituyen una injerencia *ilegal*<sup>8</sup> en el domicilio y, por lo tanto, contravienen asimismo el artículo 17 del Pacto.

3.5 Los autores sostienen que los desalojos forzosos son también *arbitrarios*<sup>9</sup> en la medida en que se llevan a cabo de forma discriminatoria por motivos raciales. La amenaza de desalojo forzoso de la comunidad de Dobri Jeliaskov se debe principalmente al origen étnico romaní de los habitantes y a la situación de irregularidad en que se encuentran las viviendas que deben habitar los romaníes a causa de su origen étnico. Los autores añaden que, como tales, dichos desalojos tienen tanto una intención discriminatoria ilegal como un efecto discriminatorio ilegal.

3.6 Los autores se remiten a la Recomendación N° 4 del Consejo de Europa (2005) sobre la mejora de las condiciones de vivienda de los romaníes y nómadas de Europa, aprobada el 23 de febrero de 2005<sup>10</sup>, y sostienen que la recomendación debe usarse como fuente autorizada para la interpretación del artículo 17 del Pacto y que, dado que dicha recomendación es vinculante para Bulgaria, cualquier contravención de ella equivaldría a una injerencia ilegal en el domicilio. En vista de lo que antecede, los autores afirman que la amenaza de desalojo forzoso a que se hace referencia en esta comunicación debe considerarse ilegal y arbitraria y, en consecuencia, constitutiva de una infracción del artículo 17 del Pacto.

3.7 Los autores afirman que las amenazas de desalojo constituyen una infracción del artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 2, del Pacto. En virtud del artículo 5, párrafo 4), de la Constitución, los derechos consagrados en el Pacto y en otros tratados ratificados por Bulgaria son directamente exigibles en su marco jurídico nacional. El artículo 26 exige que los derechos amparados por el artículo 17 del Pacto se garanticen sin discriminación basada en el origen étnico romaní, y que se garantice la igualdad de protección prevista en el artículo 17 del Pacto.

3.8 Los autores sostienen que el Estado parte ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que, por lo tanto, en su marco jurídico nacional son directamente exigibles los derechos garantizados por dicho Pacto, entre ellos el derecho a una vivienda adecuada, consagrado en su artículo 11, que comprende la prohibición de los desalojos forzosos. Los autores afirman que el artículo 11 de dicho Pacto, leído conjuntamente con el artículo 2, obliga al Estado parte a respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada sin discriminación. Añaden que el derecho a una vivienda adecuada consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es similar a los derechos protegidos por el artículo 17 del Pacto, entraña la prohibición de los desalojos forzosos. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los desalojos solo pueden justificarse en circunstancias muy excepcionales y después de que se hayan examinado todas las alternativas viables al desalojo, en consultas serias con las personas

<sup>8</sup> La cursiva es de los autores.

<sup>9</sup> La cursiva es de los autores.

<sup>10</sup> La Recomendación N° 4 (2005), entre otras cosas, requiere que las políticas nacionales de vivienda enfrenten los problemas de vivienda específicos de los romaníes, con urgencia y de manera no discriminatoria. Además, la recomendación establece que "los Estados miembros deben promover y proteger el derecho de todos a una vivienda adecuada y garantizar a los romaníes la igualdad de acceso a una vivienda adecuada a través de políticas idóneas y proactivas, en particular en el ámbito de la prestación de servicios y la vivienda asequibles". Con respecto a "la protección y la mejora de las viviendas existentes", los Estados "deben velar por que los romaníes estén protegidos contra el desalojo ilegal, el hostigamiento y otras amenazas, independientemente de donde residan" y "deben establecer un marco legal que se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos, garantizar una protección eficaz contra los desalojos forzosos ilegales y colectivos y controlar estrictamente las circunstancias en que pueden ser llevados a cabo los desalojos legales".

afectadas. Incluso entonces, deben respetarse las diversas salvaguardias relativas a las debidas garantías procesales enumeradas en la Observación general N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párr. 16). Por último, y aunque se hayan cumplido satisfactoriamente los criterios correspondientes a las debidas garantías procesales, los desalojos no pueden llevarse a cabo de manera discriminatoria, ni pueden dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.

3.9 Los autores afirman que, como demuestran los hechos y los procedimientos internos señalados en la presente comunicación, el Estado parte no ha respetado el procedimiento legal en relación con la prohibición de los desalojos forzosos. Llegan a la conclusión de que el Estado parte vulnera el artículo 26 del Pacto al no prohibir la discriminación en razón del origen étnico romaní ni garantizar la igualdad de protección prevista en el artículo 17 del Pacto ni la igualdad de protección respecto de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluidos el derecho a una vivienda adecuada y la prohibición de los desalojos forzosos.

3.10 Para concluir, los autores afirman que, si se procediese al desalojo forzoso de la comunidad de Dobri Jeliaskov, el Estado parte infringiría los artículos 17 y 26 del Pacto, leídos por separado y conjuntamente con el artículo 2, incluida la cláusula de no discriminación del artículo 2, párrafo 2, del Pacto. Afirman asimismo que debería dictarse urgentemente una orden judicial de suspensión del desalojo forzoso de la comunidad de Dobri Jeliaskov. Los autores agregan que las medidas de reparación también deberían abarcar la regularización de la comunidad de Dobri Jeliaskov, lo que incluiría el reconocimiento de cierto nivel de seguridad de la tenencia que garantizase una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. Todas las medidas de reparación deberían aplicarse recurriendo a la participación genuina y real de la comunidad de Dobri Jeliaskov.

#### **Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo**

4.1 Mediante nota verbal de 9 de septiembre de 2011, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y sobre el fondo de la comunicación. En cuanto a la admisibilidad, afirma que los autores no han agotado todos los recursos internos disponibles y que, por lo tanto, la comunicación debe ser declarada inadmisibile de conformidad con el artículo 96 f) del reglamento del Comité. El Estado parte afirma que el Tribunal Administrativo Supremo, en su decisión de 28 de octubre de 2009, estableció que los autores no habían presentado ninguna prueba que demostrara su derecho de propiedad total o parcial de los bienes inmuebles ni del derecho a construir en dichos terrenos. De conformidad con el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a los autores demostrar sus derechos de propiedad. Estos tienen la oportunidad de demostrar la propiedad de un bien inmueble determinado presentando ante un notario público una prueba de la tenencia ininterrumpida del bien inmueble en cuestión.

4.2 El Estado parte afirma que las autoridades no han podido encontrar ninguna prueba de que los autores o sus respectivos representantes hayan siquiera iniciado el procedimiento previsto en el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil. Los autores han recurrido la orden de desalojo basándose en los documentos de propiedad presentados por el municipio. El Estado parte añade que las autoridades tampoco tienen conocimiento de que los autores hayan planteado su caso ante algún organismo nacional de derechos humanos, como el Defensor del Pueblo o la Comisión de Protección contra la Discriminación.

4.3 El Estado parte señala a la atención del Comité que los autores de esta comunicación han presentado denuncias similares ante el procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación

a este respecto, el Experto independiente sobre cuestiones de las minorías y el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Sostiene que esas prácticas controvertidas no se ajustan al artículo 96 c) del reglamento del Comité y, en consecuencia, no deben alentarse.

4.4 En cuanto al fondo, el Estado parte sostiene que los bienes inmuebles en cuestión fueron expropiados por el municipio en 1974 de conformidad con los planes de desarrollo territorial de Sofía a la sazón vigentes. Se han concedido indemnizaciones en forma de derechos de propiedad sobre apartamentos en edificios de construcción reciente.

4.5 El Estado parte afirma que el recurso contra la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 se ha resuelto ya y que el Tribunal Administrativo Supremo confirmó la ilegalidad de las actuaciones de los autores el 28 de octubre de 2009. No obstante, los autores están aún en posesión de la propiedad municipal y las autoridades municipales no han llevado a cabo ningún desalojo.

4.6 El Estado parte sostiene que el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, establecido en el artículo 6, párrafo 2), de la Constitución y Ley fundamental, no permite ninguna restricción de derechos ni ningún privilegio por motivos de raza, nacionalidad, etnia, sexo, origen, religión, educación, convicciones, afiliación política o condición personal o social. En su Sentencia interpretativa N° 14 de 1992, el Tribunal Constitucional dictaminó que "la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", en el sentido del artículo 6, párrafo 2), de la Constitución, significa igualdad en todos los actos jurídicos. La Ley de protección contra la discriminación, aprobada en 2003, también confiere los mismos derechos a todos los ciudadanos, independientemente de su etnia, con respecto a la posibilidad de tener acceso a una vivienda de alquiler en edificios o edificaciones sociales o de comprar una vivienda. El Estado parte añade que las víctimas de la presunta discriminación tienen la opción de presentar una denuncia ante la Comisión de Protección contra la Discriminación o ante un tribunal. De conformidad con el artículo 53 de la Ley de protección contra la discriminación, el procedimiento ante la Comisión es gratuito.

4.7 El Estado parte afirma que la política de las autoridades con respecto a la comunidad romaní se basa en el Programa Marco de integración de los romaníes en condiciones de igualdad en la sociedad búlgara (Programa Marco), aprobado por Decisión del Consejo de Ministros en 1999. En la sección IV del Programa Marco, titulada "Estructura territorial de los barrios de romaníes", se establece que los barrios separados de romaníes, la mayoría de los cuales están situados fuera de los respectivos planes municipales y carecen de una infraestructura adecuada, son uno de los problemas socioeconómicos más graves de la comunidad. El actual Programa Marco se actualizó en 2010 y su alcance se amplió para incluir las cuestiones de la discriminación. El Estado parte también se remite, en este contexto, al Programa nacional para mejorar las condiciones de vivienda de los romaníes en Bulgaria (2005-2015).

4.8 El Estado parte señala también que, en el contexto del cumplimiento de los criterios de adhesión a la Unión Europea, se han puesto en marcha y están llevándose a cabo varios proyectos destinados a mejorar la situación de los miembros de los grupos étnicos, con especial atención a los romaníes. Estos proyectos están financiados por el Programa de ayuda comunitaria a los países de Europa Central y Oriental (Phare) de la Unión Europea, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, el presupuesto nacional, a través del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas, y los presupuestos de varias municipalidades. El Estado parte añade que las actividades de integración de los romaníes, incluidos los proyectos que llevan a cabo organizaciones no gubernamentales y que se financian con contribuciones nacionales o externas, son objeto de un seguimiento constante.

4.9 El Estado parte afirma que en el Consejo Nacional de Cooperación en Asuntos Étnicos y Demográficos (Consejo de Cooperación), órgano consultivo y de coordinación dependiente del Consejo de Ministros, se ha establecido una Comisión para la Integración de los Romaníes. Además existe un Consejo Público de Asuntos Romaníes, en cuyo programa figura como uno de los puntos más importantes la resolución de los problemas de vivienda de la comunidad romaní de Sofía. Se ha elaborado un plan para un proyecto que se ha presentado para su aprobación al Consejo Municipal en el marco del Programa operativo de desarrollo regional (2007-2013). Con arreglo al proyecto, la municipalidad de Sofía compraría terrenos para la construcción de edificios con avanzada infraestructura social y técnica. Los nuevos edificios se destinarán a proporcionar viviendas sociales modernas a las personas socialmente desfavorecidas de Sofía, entre ellas los romaníes.

#### **Comentarios de los autores sobre las observaciones del Estado parte**

5.1 El 24 de octubre de 2011, los autores presentaron sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte. Sostienen que la presente comunicación debe ser declarada admisible, ya que los procedimientos internacionales a que se refiere el Estado parte, a saber, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y el Experto independiente sobre cuestiones de las minorías, no están comprendidos en la categoría de los "procedimientos de examen o arreglo internacionales" mencionados en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo o en el artículo 96 e) del reglamento del Comité<sup>11</sup>.

5.2 En cuanto a la referencia que hace el Estado parte al procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos, los autores afirman que ni la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights ni la Asociación para la Igualdad de Oportunidades han recurrido a este procedimiento por lo que se refiere a la presente comunicación. En cualquier caso, el procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos tampoco está comprendido en la categoría de los "procedimientos de examen o arreglo internacionales" mencionados en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo o en el artículo 96 e) del reglamento del Comité.

5.3 Por lo que se refiere al agotamiento de los recursos internos, los autores señalan que el Estado parte reconoce en sus observaciones que "el recurso contra la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 se ha resuelto ya y que el Tribunal Administrativo Supremo confirmó la ilegalidad de las actuaciones de los autores". Sostienen, por lo tanto, que no queda otro recurso interno que pueda agotarse. Los autores aducen que el reconocimiento por el Estado parte de la decisión del Tribunal Administrativo Supremo también demuestra que el derecho interno no proporciona vías de recurso a quienes enfrentan desalojos forzosos de los llamados asentamientos irregulares.

5.4 En relación con el Defensor del Pueblo y la Comisión de Protección contra la Discriminación, los autores sostienen que, aunque recurrieron al primer órgano, este no pudo detener la amenaza de desalojo forzoso, que debía ejecutarse en julio de 2011. En este sentido, recuerdan que la orden de desalojo no se ha ejecutado hasta la fecha gracias a las medidas provisionales solicitadas por el Comité el 8 de julio de 2011. Los autores sostienen, además, que no podrían haber recurrido a la Comisión de Protección contra la Discriminación, dado que el asunto de la presente comunicación ya ha sido sometido a los

<sup>11</sup> Se hace referencia a la comunicación N° 540/1993, *Celis Laureano c. el Perú*, dictamen aprobado el 25 de marzo de 1996, párr. 7.1; y a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos – Un manual para la sociedad civil* (Nueva York y Ginebra, 2008), pág. 157.



tribunales del Estado parte<sup>12</sup>. Con referencia a la jurisprudencia del Comité<sup>13</sup>, los autores sostienen que el requisito de agotar todos los recursos internos se aplica en la medida en que esos recursos parezcan ser eficaces en la comunicación de que se trate. En consecuencia, los autores sostienen que no tienen a su disposición ninguna ley o recurso interno que pueda impedir el desalojo forzoso.

5.5 En cuanto al fondo, los autores afirman que el proyecto de conceder indemnizaciones por los bienes inmuebles en cuestión (véase el párrafo 4.4 *supra*) nunca se aplicó plenamente y que ninguno de ellos recibió indemnización alguna, contrariamente a lo que da a entender el Estado parte. De hecho, los autores siguen residiendo en la comunidad de Dobri Jeliaskov, que existe en ese emplazamiento desde hace más de 70 años. Los autores afirman que la comunidad de Dobri Jeliaskov no se ha beneficiado de las leyes, las políticas y los programas destinados a mejorar las condiciones de vivienda de los romaníes a que se refiere el Estado parte en sus observaciones.

5.6 Con referencia a la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales<sup>14</sup>, los autores añaden que, en caso de que la comunidad de Dobri Jeliaskov sea considerada irregular o "ilegal", este hecho, por sí solo, no justifica el desalojo forzoso. Los autores concluyen que, de llevarse a cabo, el desalojo forzoso de la comunidad de Dobri Jeliaskov constituiría una vulneración por el Estado parte de los artículos 17 y 26 del Pacto, leídos por separado y conjuntamente con el artículo 2, incluida la cláusula de no discriminación de dicho artículo. Sostienen que las medidas de reparación deben incluir la regularización de la comunidad de Dobri Jeliaskov, lo que entraña proporcionar cierto grado de seguridad de la tenencia que garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. Si la comunidad de Dobri Jeliaskov prefiere que se le proporcionen viviendas sustitutivas, debe permitirse a sus habitantes participar de forma libre, activa y significativa en todas las decisiones relacionadas con la provisión de tales viviendas.

### **Observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo**

6.1 Mediante nota verbal de 5 de enero de 2012, el Estado parte presentó sus observaciones adicionales. Sostiene que la afirmación de los autores relativa a los derechos de propiedad sobre la parcela de terreno donde están asentadas las estructuras de la llamada "comunidad de Dobri Jeliaskov" sigue siendo infundada. En 1974, la municipalidad expropió la parcela en cuestión para la construcción de dos edificios de apartamentos y se dieron las indemnizaciones oportunas. El Estado parte añade que este hecho quedó establecido de manera incontestable en la decisión del Tribunal Administrativo Supremo de 28 de octubre de 2009. Cualquier otra reclamación sobre dicho bien debe hacerse mediante los procedimientos internos establecidos, de conformidad con el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil.

<sup>12</sup> Con arreglo al artículo 6, párr. 2, apartado 2, del reglamento de la Comisión de Protección contra la Discriminación, "[l]a persona que presente una denuncia a la Comisión deberá adjuntar una declaración de que no se ha sometido a los tribunales ningún otro litigio entre las mismas partes".

<sup>13</sup> Véanse, por ejemplo, las comunicaciones N° 1403/2005, *Gilberg c. Alemania*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 25 de julio de 2006, párr. 6.5; N° 1003/2001, *P. L. c. Alemania*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 22 de octubre de 2003, párr. 6.5; y N° 1188/2003, *Riedl-Riedenstein y otros c. Alemania*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 2 de noviembre de 2004, párr. 7.2. También se hace referencia a James Crawford, *International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries* (Cambridge University Press, 2002), pág. 265.

<sup>14</sup> Se hace referencia a Comité Europeo de Derechos Sociales, *European Roma Rights Center v. Bulgaria*, denuncia N° 31/2005, decisión sobre el fondo adoptada el 18 de octubre de 2006, párr. 53 y conclusión; e *INTERIGHTS v. Greece*, denuncia N° 49/2008, decisión sobre el fondo adoptada el 11 de diciembre de 2009, párr. 60 y conclusión.

6.2 El Estado parte se remite al artículo 12 de la Ley de planificación y urbanización de la municipalidad de Sofía<sup>15</sup>, que contiene una lista exhaustiva de todas las construcciones que pueden autorizarse en la llamada zona verde, y afirma que la legalización de la comunidad de Dobri Jeliaskov, que está ubicada en una zona de ese tipo entre dos edificios de apartamentos, privaría a las comunidades vecinas de los derechos que les corresponden.

6.3 El Estado parte añade que, en la última encuesta celebrada por el Consejo Público de Asuntos Romaníes en julio de 2011, los habitantes de la comunidad de Dobri Jeliaskov confirmaron una vez más que preferían que se les dieran viviendas sustitutivas dentro de los límites de la ciudad. Se está tratando de concretar esta solución en el marco del Programa operativo de desarrollo regional (2007–2013) (véase el párrafo 4.9 *supra*). Gracias a la determinación de las autoridades municipales de encontrar una solución duradera al problema, sin dejar de respetar los derechos humanos de los habitantes, no se ha llevado a cabo ningún desalojo con respecto a la comunidad de Dobri Jeliaskov.

6.4 El Estado parte señala que la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales en la causa *European Roma Rights Centre v. Bulgaria* (véase el párrafo 5.6 *supra*) fue objeto de supervisión por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que aprobó expresamente<sup>16</sup> las medidas adoptadas por el Estado parte, a nivel local y nacional, para mejorar la situación de los romaníes en materia de vivienda.

#### **Comentarios de los autores sobre las observaciones adicionales del Estado parte**

7. El 11 de marzo de 2012, en respuesta a las observaciones adicionales del Estado parte, los autores reafirmaron que nunca habían recibido de las autoridades del Estado parte ninguna indemnización por la expropiación de sus viviendas y sus terrenos. Añaden que la zona verde se estableció mucho después de que existiera la comunidad de Dobri Jeliaskov. Además, de conformidad con el derecho al desarrollo y el enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos, cualquier plan de desarrollo urbano que afecte a los habitantes de la comunidad de Dobri Jeliaskov debe dar prioridad a sus necesidades en lugar de empobrecerlos aún más. Los autores también señalan que no ha habido ningún verdadero diálogo con la comunidad de Dobri Jeliaskov en relación con la reubicación y la provisión de viviendas sustitutivas. En cuanto a la afirmación del Estado parte de que el desalojo forzoso con que se ha amenazado a la comunidad de Dobri Jeliaskov no se ha llevado a cabo "gracias a la determinación de las autoridades municipales de encontrar una solución duradera al problema", los autores afirman que ello se ha debido más bien al hecho de que el Comité haya solicitado medidas provisionales.

#### **Observaciones adicionales del Estado parte sobre el fondo**

8. El 25 de abril de 2012, el Estado parte presentó sus observaciones adicionales, en las que afirmó que la indemnización por la expropiación de la parcela de terreno en cuestión se había pagado el 25 de diciembre de 1975. Sostiene que las autoridades municipales mantienen un diálogo con los representantes de la comunidad de Dobri Jeliaskov, lo que puede verificarse en las actas del Consejo Municipal de romaníes del subdistrito de Vuzrajane. El Estado parte añade que la administración del distrito ha aplicado estrictamente todas las recomendaciones pertinentes en relación con la presente

---

<sup>15</sup> El artículo 12 de la Ley de planificación y urbanización de la municipalidad de Sofía establece lo siguiente: "Previo celebración de un debate público, en las zonas de urbanización y los terrenos independientes del plan verde se permitirán las construcciones destinadas a: 1) redes e instalaciones de infraestructura técnica; 2) mantenimiento del plan verde; 3) actividades deportivas y de esparcimiento y parques infantiles; y 4) servicios para los visitantes".

<sup>16</sup> Resolución CM/ResChS(2007)2 sobre la Denuncia colectiva N° 31/2005 del European Roma Rights Centre contra Bulgaria.

comunicación, entre ellas la del Defensor del Pueblo de no adoptar ninguna medida para desalojar a los habitantes ilegales hasta que se hayan cumplido todas las condiciones necesarias en lo que se refiere a las viviendas sustitutivas.

#### **Presentación adicional en relación con la adopción de medidas provisionales**

9. El 8 de mayo de 2012, los autores afirman que, en un intento de obligarlos a marcharse, el 29 de abril de 2012, la municipalidad de Sofía hizo que la empresa de abastecimiento de agua, Sofiyska Voda, cortara el suministro de agua a la comunidad de Dobri Jeliaskov. Sostienen que, al privarlos del suministro de agua corriente, el Estado parte obra en contra de la solicitud del Comité de adoptar medidas provisionales de protección. Por otra parte, en cuanto que medio de desalojo forzoso, el corte de agua infringe la prohibición relativa a las injerencias arbitrarias o ilegales en el domicilio, prevista en el artículo 17 del Pacto. Además, el corte de agua podría equivaler a una vulneración del derecho a la vida consagrado en el artículo 6 del Pacto<sup>17</sup> y de la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, consagrada en el artículo 7 del Pacto. Los autores piden al Comité que intervenga urgentemente ante el Estado parte y le pida que cumpla sus obligaciones de garantizar los derechos consagrados en el Pacto, entre otras formas ordenando a la municipalidad de Sofía y a la empresa de abastecimiento de agua, Sofiyska Voda, que restablezcan de inmediato el suministro de agua a la comunidad de Dobri Jeliaskov.

10. El 9 de mayo de 2012, el Comité de Derechos Humanos, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, reiteró al Estado parte su solicitud de medidas provisionales de protección. Le informó de que, si bien no se había desalojado por la fuerza a los autores, el corte del suministro de agua a la comunidad de Dobri Jeliaskov podría considerarse un medio indirecto para lograr el desalojo. En consecuencia, pidió al Estado parte que restableciera el suministro de agua a la comunidad de Dobri Jeliaskov.

11. El 21 de mayo de 2012, el Estado parte presentó sus observaciones adicionales y señaló que, durante el examen periódico de las instalaciones de agua, el dueño de estas, la sociedad anónima Sofiyska Voda, había descubierto la existencia de dos grifos que permitían el flujo continuo del agua sin llave de paso ni medidor de consumo, que habían sido añadidos ilegalmente a la red de distribución de agua existente, por lo que se había procedido a retirarlos. El Estado parte sostiene que, por consiguiente, las medidas en cuestión son irrelevantes en relación con la presente comunicación y, en todo caso, no tenían por objeto desalojar por la fuerza de sus hogares a los autores.

12.1 El 30 de mayo de 2012, los autores afirmaron que, el 19 de mayo de ese año, la Asociación para la Igualdad de Oportunidades, en representación de la comunidad de Dobri Jeliaskov, se había reunido con la empresa de abastecimiento de agua Sofiyska Voda para negociar el restablecimiento del suministro de agua. Las viviendas carecían de acceso independiente al suministro de agua, y durante más de 50 años la comunidad de Dobri Jeliaskov había compartido esta fuente limitada de agua. La Asociación para la Igualdad de Oportunidades y la empresa de abastecimiento de agua Sofiyska Voda habían convenido inicialmente en que la comunidad de Dobri Jeliaskov necesitaba el suministro de agua y habían comenzado a discutir detalles sobre las medidas necesarias para restablecer la conexión, entre ellas que la Asociación para la Igualdad de Oportunidades garantizara el pago. A esta reunión se había sumado más tarde la alcaldesa de la municipalidad metropolitana de Sofía, subdistrito de Vuzrajane, dado que las autoridades locales afirmaban ser propietarias de los terrenos en que la comunidad de Dobri Jeliaskov había

<sup>17</sup> Se hace referencia a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el tercer informe periódico de Israel, párr. 18.

vivido durante más de 70 años, y por tanto, debían dar su consentimiento a cualquier restablecimiento del suministro de agua. Tras la llegada de la alcaldesa había quedado claro que la municipalidad era reacia a permitir que se restableciera el suministro de agua.

12.2 Los autores sostienen además que, ulteriormente, se pidió a la Asociación para la Igualdad de Oportunidades que abandonara la sala para que la alcaldesa y su personal pudieran reunirse en privado con el personal de la empresa de abastecimiento de agua Sofiyska Voda. Se desconoce lo que ocurrió en esta reunión, pero se prometió a la Asociación para la Igualdad de Oportunidades que se le informaría de cualquier decisión. En fecha posterior a esta reunión, un teniente de alcalde se reunió con la comunidad de Dobri Jeliaskov y le informó de que las autoridades se negaban a dar su consentimiento al restablecimiento del suministro de agua a la comunidad. A la fecha en que los autores presentaron la información adicional, el 30 de mayo de 2012, no se había restablecido aún el suministro de agua.

12.3 En la misma comunicación, los autores señalan también a la atención del Comité una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>18</sup> relativa a una comunidad de romaníes asentada desde hace tiempo en un lugar, en la que el Tribunal Europeo dictaminó por unanimidad que, pese a la situación de tenencia irregular de dicha comunidad, el hecho de amenazarla con un desalojo forzoso infringiría el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que las autoridades búlgaras debían considerar opciones alternativas al desalojo, como la regularización de la situación de tenencia y la mejora de las viviendas existentes, en consulta con la comunidad. Añaden que el artículo 8 del Convenio Europeo garantiza el respeto del domicilio, lo que es similar a los derechos protegidos por el artículo 17 del Pacto.

### **Deliberaciones del Comité**

#### *Examen de la admisibilidad*

13.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

13.2 Con respecto al requisito establecido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité toma nota del argumento del Estado parte de que los autores de la presente comunicación han presentado demandas similares al procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos, al Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, al Experto independiente sobre cuestiones de las minorías y al Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Además, el Comité toma nota de la explicación de los autores de que ni la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights ni la Asociación para la Igualdad de Oportunidades han recurrido al procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos. Los autores también aducen que, en cualquier caso, ninguno de los procedimientos a que se refiere el Estado parte está comprendido en la categoría de los "procedimientos de examen o arreglo internacionales" mencionados en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo.

13.3 A este respecto, el Comité recuerda que los procedimientos o mecanismos extraconvencionales establecidos por la Comisión de Derechos Humanos, y asumidos por

---

<sup>18</sup> Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Yordanova and Others v. Bulgaria* (demanda N° 25446/06), sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 24 de abril de 2012.

el Consejo de Derechos Humanos, cuyo mandato consiste en examinar situaciones de derechos humanos en un determinado país o territorio o los principales tipos de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo e informar públicamente de ellos, no constituyen un procedimiento de examen o arreglo internacionales en el sentido del artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo<sup>19</sup>. El Comité recuerda que el estudio de problemas de derechos humanos de carácter más general, aunque pueda remitir a información sobre ciertos individuos o aprovecharla, no se puede asimilar al examen de casos individuales en el sentido del artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo<sup>20</sup>. En consecuencia, el Comité considera que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la comunicación a efectos de su admisibilidad.

13.4 El Comité observa la objeción del Estado parte a la admisibilidad de la presente comunicación fundamentada en que los autores no han agotado los recursos internos. Toma nota de la explicación del Estado parte, según la cual, de conformidad con el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, los autores tuvieron la oportunidad de demostrar sus derechos de propiedad sobre la parcela de tierra donde está ubicada la comunidad de Dobri Jeliaskov, y que no sometieron la cuestión al Defensor del Pueblo ni a la Comisión de Protección contra la Discriminación. El Comité toma nota también del argumento de los autores de que, a pesar de haber recurrido al Defensor del Pueblo, esta institución no pudo detener la amenaza de desalojo, que debía ejecutarse en julio de 2011. Los autores adjeron, además, que no podían haber recurrido a la Comisión de Protección contra la Discriminación, dado que el asunto de la presente comunicación ya había sido sometido a los tribunales del Estado parte y que, en cualquier caso, no tenían a su disposición ninguna ley nacional o recurso que pudiera haber impedido el desalojo de la comunidad de Dobri Jeliaskov. El Comité observa, además, que los autores han recurrido sin éxito la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 ante el Tribunal Municipal de Sofía y el Tribunal Administrativo Supremo.

13.5 Si bien ha tomado nota del artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual toda persona puede demostrar la propiedad de un inmueble determinado mediante la presentación ante notario público de una prueba de tenencia ininterrumpida del bien inmueble en cuestión, el Comité considera, sin embargo, que el Estado parte no ha proporcionado información detallada sobre la disponibilidad y la efectividad del recurso previsto en el Código de Procedimiento Civil en las circunstancias particulares del caso de los autores, es decir, cuando no existe por su parte una pretensión de un título de propiedad. El Comité observa además que el desalojo de la comunidad de Dobri Jeliaskov debía ejecutarse en julio de 2011 y que los autores no tenían a su disposición ningún otro recurso interno que pudiera haber evitado que se llevara a cabo el desalojo. Además, a la luz del propio reconocimiento del Estado parte de que las víctimas de la supuesta discriminación tienen la opción de presentar una denuncia ante la Comisión de Protección contra la Discriminación o ante un tribunal (véase el párrafo 4.6 *supra*), el Comité acepta la explicación de los autores de por qué no podían haber recurrido a la Comisión en cuestión, dado que el asunto al que se refiere la presente comunicación ya había sido objeto de acciones judiciales ante los tribunales del Estado parte. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo, el Comité recuerda que cualquier conclusión de este órgano tendría solo un carácter exhortatorio y no sería vinculante para las autoridades. El Comité llega a la conclusión de que dicha denuncia no

<sup>19</sup> Véanse las comunicaciones N° 540/1993, *Celis Laureano c. el Perú*, párr. 7.1; y N° 1776/2008, *Ali Bashasha y Hussein Bashasha c. la Jamahiriya Árabe Libia*, dictamen aprobado el 20 de octubre de 2010, párr. 6.2.

<sup>20</sup> Véase la comunicación N° 1495/2006, *Madoui c. Algeria*, dictamen aprobado el 28 de octubre de 2008, párr. 6.2.

puede considerarse un recurso efectivo<sup>21</sup> que los autores estuvieran obligados a agotar a los efectos del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo. En estas circunstancias, el Comité considera que los autores, al haber recurrido la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 ante el Tribunal Municipal de Sofía y el Tribunal Administrativo Supremo, han agotado los recursos internos, de conformidad con el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

13.6 En relación con la presunta vulneración del artículo 26, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, así como del artículo 2, leído conjuntamente con el artículo 17, del Pacto, en el sentido de que el Estado parte no ha respetado los principios de no discriminación e igualdad de protección al denegar a los autores los recursos y la protección contra los desalojos forzosos y la demolición de sus viviendas, en razón de su origen étnico romaní, el Comité considera que estas denuncias no han sido suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad. Además, aún no está claro si estas denuncias se plantearon en algún momento ante las autoridades del Estado parte y los tribunales. En estas circunstancias, el Comité considera que esta parte de la comunicación es inadmisibile en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

13.7 El Comité observa que las referencias de los autores a los artículos 6 y 7 del Pacto (véase el párrafo 9 *supra*) contienen argumentos relacionados con las medidas provisionales solicitadas por el Comité y no se plantearon como reclamaciones por separado en virtud del Pacto.

13.8 El Comité considera que las reclamaciones restantes de los autores en relación con el artículo 17 del Pacto están suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad y procede a su examen en cuanto al fondo.

#### *Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

14.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

14.2 Los autores afirman que la ejecución de la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 y la consiguiente expulsión de la comunidad de Dobri Jeliaskov equivaldría a someterlos a injerencias arbitrarias e ilegales en su domicilio y, por lo tanto, vulneraría los derechos respectivos que los amparan en virtud del artículo 17 del Pacto. A este respecto, el Comité recuerda que el término "domicilio", empleado en el artículo 17 del Pacto, debe entenderse en su acepción de lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación habitual<sup>22</sup>. En la presente comunicación, es indiscutible que la comunidad de Dobri Jeliaskov, donde están ubicados los domicilios de los autores y donde han residido ininterrumpidamente, ha existido desde hace más de 70 años con la aquiescencia de las autoridades del Estado parte, y que el domicilio de los autores figura en los registros de la policía. En estas circunstancias, el Comité considera que las viviendas de los autores en la comunidad de Dobri Jeliaskov son sus "domicilios" en el sentido del artículo 17 del Pacto, independientemente del hecho de que los autores no sean los propietarios legítimos de la parcela de tierra en que se construyeron esas viviendas.

<sup>21</sup> Véanse las comunicaciones Nº 900/1999, *C. c. Australia*, dictamen aprobado el 28 de octubre de 2002, párr. 7.3; y Nº 1184/2003, *Brough c. Australia*, dictamen aprobado el 17 de marzo de 2006, párr. 8.7.

<sup>22</sup> Véase la Observación general Nº 16 (1988), sobre el derecho al respeto de la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, así como a la protección de la honra y reputación, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer período de sesiones, Suplemento Nº 40, A/43/40, anexo, párr. 5.*

14.3 El Comité debe entonces determinar si el desalojo de los autores y la demolición de sus viviendas constituiría una vulneración del artículo 17 del Pacto si se ejecutara la orden de desalojo de 24 de julio de 2006. No cabe duda de que la orden de desalojo, de ejecutarse, daría lugar a que los autores perdieran su vivienda y de que, por lo tanto, habría una injerencia en su domicilio. El Comité recuerda que, en virtud del artículo 17 del Pacto, es necesario que cualquier injerencia en el domicilio no solo sea legal, sino que, además, no sea arbitraria. El Comité considera que, de conformidad con su Observación general N° 16 (1988), sobre el derecho al respeto de la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, así como de la honra y reputación, el concepto de arbitrariedad a que se refiere el artículo 17 del Pacto pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esté en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y sea, en todo caso, razonable en las circunstancias particulares del caso<sup>23</sup>.

14.4 El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que el hecho de que los autores no hubieran presentado ninguna prueba que demostrase sus derechos de propiedad sobre la parcela de terreno donde estaban situadas las edificaciones de la comunidad de Dobri Jeliazkov era suficiente para demostrar que la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 era legal. Aun suponiendo que el desalojo de los autores y la demolición de sus viviendas estuvieran permitidos por la legislación del Estado parte, en concreto, por el artículo 65 de la Ley de propiedad municipal y el artículo 178, párrafo 5, de la Ley del territorio, el Comité observa, sin embargo, que la cuestión que sigue quedando por determinar es si esa injerencia sería arbitraria.

14.5 El Comité toma nota de las alegaciones de los autores de que la comunidad de Dobri Jeliazkov existe desde hace más de 70 años con la aquiescencia de las autoridades del Estado parte; que la "zona verde" se estableció con carácter retroactivo (véanse los párrafos 6.2 y 7 *supra*); y que, según la alcaldesa de la municipalidad de Sofía, subdistrito de Vuzrajane, no era posible proporcionarles una vivienda social, ya que vivían en edificios ilegales construidos en terrenos municipales (véase el párrafo 2.4 *supra*). El Comité observa además que, aunque las autoridades del Estado parte, en principio, tienen derecho a expulsar a los autores, que ocupan ilegalmente terrenos municipales, la falta de derechos de propiedad de los autores sobre la parcela municipal en cuestión fue la única justificación que se dio para emitir la orden de desalojo contra la comunidad de Dobri Jeliazkov, y que el Estado parte no ha señalado ninguna razón urgente para proceder al desalojo forzoso de los autores antes de proporcionarles viviendas sustitutivas adecuadas.

14.6 El Comité considera sumamente pertinente la circunstancia de que, durante varias décadas, las autoridades del Estado parte no hayan procedido a desalojar a los autores ni a sus antepasados y, por lo tanto, hayan tolerado, de hecho, la existencia irregular de la comunidad de Dobri Jeliazkov en terrenos municipales. Además, a pesar de la orden de expropiación emitida en 1974, la comunidad ha permanecido en su ubicación actual durante más de 30 años después de esa fecha. Aunque los ocupantes irregulares no pueden reivindicar el derecho a permanecer en el lugar por tiempo indefinido, la inactividad de las autoridades ha permitido que los autores creen fuertes vínculos con el emplazamiento de Dobri Jeliazkov y establezcan allí una vida comunitaria. En opinión del Comité, estos hechos debían haberse tenido en cuenta al decidir si, con respecto a las viviendas construidas por los autores en terrenos municipales, era necesario intervenir y cómo se debía proceder. La orden de desalojo de 24 de julio de 2006 se basaba en el artículo 65 de la Ley de propiedad municipal, en virtud del cual las personas que vivan ilegalmente en terrenos municipales pueden ser expulsadas sean cuales fueren las circunstancias especiales, como el hecho de vivir en comunidad durante varias décadas, o las

<sup>23</sup> *Ibid.*, párr. 4. Véanse también las comunicaciones N° 1510/2006, *Vojnović c. Croacia*, dictamen aprobado el 30 de marzo de 2009, párr. 8.5; y N° 687/1996, *Rojas García c. Colombia*, dictamen aprobado el 3 de abril de 2001, párr. 10.3.

consecuencias posibles, como quedarse sin hogar, y aunque no exista ninguna necesidad apremiante de cambiar la situación existente. En otras palabras, en virtud de la legislación nacional pertinente, las autoridades municipales y los tribunales del Estado parte no estaban obligados a tener en cuenta los diferentes intereses en juego ni a considerar si era razonable o no el desalojo inmediato de los autores.

14.7 Habida cuenta de la prolongada presencia sin contratiempos de los autores en la comunidad de Dobri Jeliaskov, el Comité considera que, al no tener debidamente en cuenta las consecuencias del desalojo de los autores de la comunidad de Dobri Jeliaskov, como el riesgo de dejarlos sin hogar, en una situación en que no podrían disponer inmediatamente de una vivienda sustitutiva adecuada, el Estado parte cometería una injerencia arbitraria en el domicilio de los autores si ejecutara la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 y, por consiguiente, vulneraría los derechos que los asisten en virtud del artículo 17 del Pacto.

15. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictamina que el Estado parte vulneraría los derechos que asisten a los autores con arreglo al artículo 17 del Pacto si ejecutara la orden de desalojo de 24 de julio de 2006 mientras los autores no dispongan inmediatamente de una vivienda sustitutiva adecuada.

16. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores una reparación efectiva, que incluya abstenerse de desalojarlos de la comunidad de Dobri Jeliaskov mientras los autores no dispongan inmediatamente de una vivienda sustitutiva adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

17. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión en el idioma oficial del Estado parte.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]